

Antofagasta, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno.

**VISTOS:**

El desarrollo de esta audiencia celebrada con fecha dos de noviembre del año en curso, ante la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros Titulares Oscar Clavería Guzmán, Jasna Pavlich Núñez y Juan Opazo Lagos, para conocer del recurso de nulidad interpuesto por el Abogado Patricio Marín Muñoz en representación de la parte denunciada Gobierno Regional de Antofagasta, en contra de la sentencia dictada con fecha veintiséis de mayo del año en curso, por la Juez Yohana Chávez Castillo, en causa **RIT T-15-2020, RUC 20-4-0243378-8** del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.

Alegó el Abogado Mauro La Rosa Amaral, por el recurso, quedando sus alegaciones registradas en audio.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que se ha interpuesto recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada en el Juzgado del Trabajo de Antofagasta, pidiendo la nulidad de la misma y la dictación de una sentencia de reemplazo que en principio declara la incompetencia y respecto de las causales subsidiarias la declare nula y proceda a dictar una de reemplazo, que rechace la tutela por vulneración de derechos fundamentales durante la relación laboral y la demanda de indemnización de perjuicios. Por último, respecto de la causal del artículo 477 inciso 1° del Código del Trabajo, sobre la infracción de la garantía fundamental del debido proceso, pide sentencia de reemplazo o la revisión de los antecedentes para el conocimiento del tribunal competente.

Funda el recurso en tres causales, la primera en virtud de la letra a) del artículo 478 del Código del Trabajo, por haberse pronunciado por un juez incompetente, porque se opuso la correspondiente excepción ya que el tribunal no podía conocer de esta materia por la inexistencia de la relación laboral entre las partes sin que se den los institutos del empleador y trabajador, propios del contrato

HWGYLBHJZM

del trabajo, y si bien fue rechazada la excepción de acuerdo al razonamiento del considerando undécimo, la demandante reconoció expresamente que prestó para el Gobierno Regional bajo las modalidades a honorarios y a contrata, así que no cabe duda que es incompetente conforme la aplicación del artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, ya que la contratación se ciñó al artículo 15 de la Ley de Base de la Administración del Estado, lo que se regula conforme al artículo 1° de la Ley 18.834, que vincula al trabajador con el Estado en la forma que establece el Estatuto Administrativo artículo 11 y supletoriamente por el Código Civil, tratándose de un régimen especial, pues la propia Constitución Política de la República dispone en el artículo 38 la regulación de la carrera funcionaria reenviándola a la Ley 18.575 para hacer relevante lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley 18.834, infracción que influye en lo dispositivo del fallo e incluso va en contra de lo expresado por la Contraloría General de la República y, por lo mismo, dispone que se declare la incompetencia y remita al juez civil correspondiente los antecedentes.

En segundo lugar, invoca la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo, porque la sentencia contiene decisiones contradictorias, al establecer en el considerando vigésimo octavo que no existió entre el denunciante y el Gobierno Regional una relación de carácter laboral, como también señaló en el considerando décimo sexto que el procedimiento de tutela fue excluido del presente juicio por el Tribunal Constitucional, mientras que en el considerando vigésimo noveno para fundamentar el razonamiento aplica el artículo 5° del Código del Trabajo, lo que resulta contradictorio, precisamente porque no hay un vínculo de naturaleza laboral como ella misma lo estableció, además en los considerandos trigésimo sexto y siguiente se indicó la vulneración de garantías fundamentales para luego acoger la demanda, lo que es manifiestamente contradictorio, sumado a



que llama la atención que también establece una indemnización por daño moral, lo que demuestra evidentes contradicciones.

Por último, se acude a la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo, ya que el juez incurre en el vicio de ultrapetita, al otorgar más de lo pedido ya que si bien incurre en contradicción manifiesta al acoger la acción de tutela de vulneración de derechos fundamentales durante la relación laboral, además al momento de fijar el quantum condena al pago de la suma de quince millones de pesos a título de indemnización por daño moral, mientras que el denunciante interpuso acción de tutela durante la vigencia del vínculo laboral y de manera conjunta con la indemnización por daño moral, sin solicitar perjuicio en subsidio de la tutela, de manera que *"si la intención de la sentenciadora ha sido realmente el rechazo de la denuncia de tutela -poniéndonos en el supuesto que incurrió en un error de redacción en la parte resolutive del fallo- de ser éste el supuesto, tampoco resulta procedente el acoger la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, ello pues ha sido la propia demandante de autos quien la ha interpuesto en forma conjunta con la acción principal, por lo que sí ha sido la intención del tribunal el rechazar la denuncia de tutela, pues ni siquiera se ha logrado acreditar por la denunciante la existencia de un vínculo de trabajo -considerando vigésimo octavo- hecho que resulta fundamental para el tipo de tutela deducida, tampoco resultaría procedente la condena a esta parte al pago de indemnización por daño moral, pues ambas acciones de han deducido conjuntamente, razón por la que una condena a esta parte al pago de indemnización por daño moral ha excedido los límites de la controversia, extendiéndola a puntos no sometidos a su decisión, pues la sentenciadora habría fallado como si esta última acción se hubiere deducido en subsidio, lo cual no ha acontecido"*.

Por último de conformidad al artículo 477 del Código mencionado, se sostiene una infracción al artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República,



que establece el debido proceso, ya que la acción de tutela laboral a los funcionarios públicos desvirtúa el estatuto constitucional y legal, porque el artículo 38 de la Carta Fundamental le impide al juez del trabajo aplicar criterios propios del sector privado, desconociendo la regulación integral de la carrera funcionaria y la protección de los derechos de estos trabajadores conforme al procedimiento establecido en las leyes especiales, según lo dispuesto en las Leyes 18.575 y 18.835, por lo que pide la anulación de la sentencia y la remisión de los antecedentes al juzgado competente.

**SEGUNDO:** Que tanto la incompetencia como las aparentes contradicciones y la ultrapetita, inciden en el problema que se suscitó en su época a propósito de la extensión de las normas sobre tutela laboral dictada en el Código del Trabajo y que por un momento, fugaz en el tiempo, tuvo una equívoca interpretación que generó conflictos de interpretación, pero que hoy está absolutamente resuelto, por lo que el planteamiento del recurrente debe desestimarse, entendiendo que al efecto se dictó la Ley 21.280 justamente sobre "el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral" declarándose interpretado el inciso primero del artículo 485 del Código del Trabajo. Así se estableció:

*"Las normas de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, contenidas en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V de dicho cuerpo normativo, son aplicables a todos los trabajadores, incluidos aquellos a los que hace referencia el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en los incisos primero y tercero de ese mismo artículo. También serán aplicables a los trabajadores que se desempeñen en los órganos señalados en los Capítulos VII, VIII, IX, X y XIII de la Constitución Política de la República y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos".*

Además, se sustituyó el inciso 5° del artículo 486 sobre las facultades fiscalizadoras e interpretativas de la



Dirección del Trabajo, agregándose un inciso final al respectivo artículo 489, sobre el pago de la indemnización e incluso la posibilidad de declarar la reincorporación al cargo que desempeñaba.

**TERCERO:** Que esta ley no tiene artículos transitorios ni límites temporales en su aplicación, por lo que tratándose de una norma interpretativa legal le es aplicable la excepción general de los efectos de la ley, en cuanto solo pueden disponer para los futuros según el inciso 2° del artículo 9 del Código Civil, cuya aplicación se mencionó en la vista de la causa, sin que los abogados de las partes hayan desarrollado algún argumento referido a la impugnación que aquí se resuelve.

Por tratarse de una ley interpretativa sus normas se entienden incorporadas a los artículos interpretados como si fueran de la ley original, es decir, sus efectos son retroactivos y, por lo mismo, modificaba la norma. De esta forma, desaparece la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, porque se trata de una disposición que justamente se extiende también a los funcionarios públicos por expresa disposición del legislador y, estando pendiente el proceso, no es posible desatender el mandato legal, debiendo, en consecuencia, acogerse el recurso disponiendo lo conveniente para la substanciación de la pretensión invocada, lo que por lo demás hoy existe jurisprudencia unánime acerca de la facultad de los tribunales ordinarios de la judicatura laboral para pronunciarse sobre los conflictos originados, a propósito de la necesidad de proteger los derechos fundamentales que vayan en contra de la dignidad de la persona o que constituyan agresión u hostigamiento reiterado ejercidos por el empleador o por uno o más trabajadores que menoscaben, maltraten o humillen. Por último, que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, circunstancias materiales que insertas en un conflicto jurídico necesariamente deben ser resueltas por la judicatura laboral, a menos que en virtud del artículo 485



inciso final, el afectado opte por la interposición de un recurso de protección, puesto que el legislador lo reguló específicamente por la gravedad y entidad de los derechos fundamentales que protege. Argüir lo contrario representa una amenaza concreta al Estado de Derecho Democrático, cuya principal característica es respetar los derechos o garantías fundamentales, especialmente en los conflictos que se pueda tener con la autoridad, que cualquiera sea su función, atribución o investidura tiene como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos que están garantizados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile (artículos 5, 6 y 7 de la Carta Fundamental); además que la facultad para resolver los conflictos jurídicos pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley y nadie, sea el Presidente de la República o Congreso, puede ejercer funciones judiciales, por lo que al desaparecer, aunque sea en forma eventual algunas normas que regulan parcialmente el conflicto, conforme a los procedimientos ordinarios y supletorios establecidos, la decisión de resolver la cuestión planteada, debiendo por último, en su defecto acudir a los principios de equidad como lo exige la legislación chilena en su norma de aplicación general del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

**CUARTO:** Que además el máximo tribunal ya ha sostenido para este tipo de conflicto que:

*"Cuarto: Que esta Corte, mediante diversas sentencias, como sucede, a vía ejemplar, con aquellas dictadas en los autos ingreso números 10.972-13, 5.716-15 y 652.918-16, ha sostenido que el procedimiento de tutela laboral tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores frente a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas de dicho ámbito, que están reconocidos a toda persona por la Constitución Política de la República, norma jerárquicamente superior tanto al Código del Trabajo como al Estatuto Administrativo. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 del Código del Trabajo y 4 de la Ley N° 18.834, la relación entre un funcionario público y el Estado es una de tipo laboral aunque sujeta a un estatuto especial, de manera que no*



resulta procedente privarlo de un procedimiento que está llamado a determinar el cumplimiento o la vigencia de derechos fundamentales en la relación de trabajo, por el sólo hecho que las referidas normas asocien el término empleador a un contrato de trabajo -y no a un decreto de nombramiento- o se refieran al empleador como a un gerente o administrador, olvidando que el Estado, en su relación con los funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración, ejerce funciones habituales de dirección -términos que utiliza el artículo 4° citado- como lo hace todo empleador, lo que no es incompatible con el hecho de que se trate de órganos destinados a desempeñar una función pública. Desde esta perspectiva, entonces, no existe impedimento para aplicar las normas de tutela a los funcionarios de la Administración del Estado, en la medida que su ámbito de aplicación abarca o comprende a todos los trabajadores sin distinción, calidad que -como se dijo- también poseen los referidos funcionarios." (Excma. Corte Suprema sentencia de unificación de fecha 16 de Junio de 2019 Rol 4.890-19).

**QUINTO:** Que finalmente en reciente unificación se sentencia la Excelentísima Corte Suprema en proceso seguido ante esta Corte confirmó la misma jurisprudencia:

**"Séptimo:** Que, esta Corte, mediante diversas sentencias, como sucede, a vía ejemplar, con aquellas dictadas en los autos ingreso números 10.972-13, 5.716-15, 652.918-16, 34.026-2019 y las que la recurrente cita como contraste, ha sostenido que el procedimiento de tutela laboral tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores frente a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas de dicho ámbito, que están reconocidos a toda persona por la Constitución Política de la República, norma jerárquicamente superior tanto al Código del Trabajo como al Estatuto Administrativo. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 del Código del Trabajo y 4 de la Ley N° 18.834, la relación entre un funcionario público y el Estado es una de tipo laboral aunque sujeta a un estatuto especial, de manera que no resulta procedente privarlo de un procedimiento que está llamado a determinar el cumplimiento o la vigencia de derechos fundamentales en la relación de trabajo, por el sólo hecho que las mencionadas normas asocien el término empleador a un contrato de trabajo -y no a un decreto de nombramiento- o se refieran al empleador como a un gerente o administrador, olvidando que el Estado, en su relación con los funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración, ejerce funciones habituales de dirección -términos que utiliza el artículo 4° citado- como lo hace todo empleador, lo que no es incompatible con el hecho de que se trate de órganos destinados a servir una función pública. Desde esta perspectiva, entonces, no existe impedimento para aplicar las normas de tutela a los funcionarios de la Administración del Estado, en la medida que su ámbito de aplicación abarca o comprende a todos los





trabajadores sin distinción, calidad que -como se dijo- también poseen los referidos funcionarios.

Así las cosas, debe concluirse que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para conocer de las demandas de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del término de una contrata, toda vez que el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para tomar conocimiento de las "cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas laborales" y la acción de tutela laboral, ejercitada por un funcionario público que denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales es, precisamente y a la luz de lo preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo, una de aquellas "cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales", que la referida judicatura está llamada a resolver, conforme a la interpretación de la normativa laboral que aquí se ha venido sosteniendo.

De esta manera, atendida la entidad y naturaleza de los derechos que por esta vía se pretende proteger, los que deben considerarse "inviolables en cualquier circunstancia", no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los funcionarios públicos, particularmente si se toma en consideración que los elementos de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo éste un espacio en el cual la vigencia real de los derechos fundamentales puede verse afectada como consecuencia del ejercicio de las potestades del Estado empleador.

**Octavo:** Que, por otro lado, si bien es posible discernir la existencia de recursos administrativos para reclamar de situaciones de discriminación, es palmario que aquellos no ocupan el mismo lugar que los judiciales en la garantía de los derechos de las personas. Esto es algo que reconoce la propia Constitución Política, al garantizar en su artículo 38 que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado pueda reclamar ante los tribunales que determine la ley. Se trata entonces de un asunto que el Estatuto Administrativo no regula. El Código del Trabajo sí lo hace. En consecuencia, de conformidad con el artículo primero del Código de Trabajo, resulta aplicable en la relación funcionaria el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo.

Más aún, frente a la discusión que ha motivado el punto, la corrección de la lógica interpretativa antes descrita ha tenido reconocimiento legislativo mediante la promulgación de la ley 21.280, de 30 de octubre de 2020, que expresamente reconoce la aplicación del procedimiento de tutela laboral "a todos los trabajadores, incluidos aquellos a los que hace referencia el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en los incisos primero y tercero de ese mismo artículo. También serán aplicables a los trabajadores que se desempeñen en los órganos señalados en los Capítulos VII, VIII, IX, X y XIII de la Constitución Política de la República y a





aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos”, con lo que la discusión queda definitivamente zanjada en favor de la tesis que propone el recurrente y a la cual esta Corte adscribe.

**Noveno:** Que, por consiguiente, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para conocer de la demanda de autos, toda vez que el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para conocer de la acción de tutela laboral, ejercitada por un funcionario público a contrata que denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales.” (Rol 14836-2020 de 10 de agosto pasado Rol 389-2018 de esta corte de apelaciones)

**SEXTO:** Que por lo razonado y establecido no cabe sino desestimar el recurso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 474 y siguientes del Código del Trabajo, **SE RECHAZA, sin costas,** el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Patricio Marín Muñoz en representación de la parte denunciada Gobierno Regional de Antofagasta, en contra de la sentencia dictada con fecha veintiséis de mayo del año en curso por la juez Yohana Chávez Castillo, en causa RIT T-15-2020, RUC 20-4-0243378-8 del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad contenida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

**Rol 306-2021 (LAB)**

Redacción del Ministro Titular Sr. Óscar Clavería Guzmán.

No firma el Ministro Titular Sr. Juan Fernando Opazo Lagos, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse en comisión de servicios.





HWGYLBHJZM

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Oscar Claveria G., Jasna Katy Pavlich N. Antofagasta, nueve de noviembre de dos mil veintiuno.

En Antofagasta, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

